



Sr. Amilivia González, Presidente y Ponente

Sr. Estella Hoyos, Consejero
Sr. Fernández Costales, Consejero
Sr. Pérez Solano, Consejero
Sr. Madrid López, Consejero
Sr. Nalda García, Consejero

Sr. Sobrini Lacruz, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 16 de octubre de 2008, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 15 de septiembre de 2008, tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx, debido a los daños ocasionados por el jabalí y el ciervo en unos terrenos.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 23 de septiembre de 2008, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 777/2008, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Amilivia González.

Primero.- Con fecha 8 de julio de 2005, tiene entrada en el registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en xxxxx, una solicitud de indemnización de D. xxxxx, debido a los daños ocasionados por el jabalí y el ciervo en cultivos de cereal ubicados en la Reserva Regional de Caza de xxxxx,



en las parcelas 172, 446, 173, 59, 60, 67, 69, 77, 85, 90, 91, 102, 129, 136, 146, 246, 260, 261, 267, 268, 278, 287, 291, 307, 313, 314, 315, 335, 339, 418, 423, 428, 429, 435, 438 y 443 del polígono 1, en los términos municipales de xxxxx y xxxxx.

Acompaña a su escrito informe del Celador de Medio Ambiente del día 13 de julio de 2005, en el que se señala que los daños se produjeron durante la primavera y verano de 2005 por ciervos y jabalíes, en cultivos de cereal que se encuentran dentro de la Reserva Regional de Caza de xxxxx.

Segundo.- Con fecha 14 de julio de 2005 se solicita valoración de los daños causados al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, que los cuantifica en 736,47 euros.

Tercero.- Mediante escrito de 1 de octubre de 2007, notificado el día 9, se requiere al reclamante para que aporte documentación acreditativa de la titularidad de los terrenos donde ocurrieron los hechos, así como certificación bancaria en la que conste la titularidad de la cuenta donde desea que se ingrese la indemnización.

El 11 de octubre de 2007, tiene entrada en el registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxx la documentación solicitada.

Cuarto.- Con fecha 29 de enero de 2008, tras comprobar la existencia de un error en la superficie de una de las parcelas, se solicita nueva valoración de los daños al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería.

La nueva valoración, de 11 de febrero de 2008, cuantifica los daños en 730,80 euros.

Quinto.- El 4 de marzo de 2008, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxx dicta resolución nombrando instructor del expediente.

Sexto.- En el trámite de audiencia concedido a la parte interesada, (notificado el 8 de mayo de 2008), a efectos de que formule alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime oportunos, ésta no realiza alegación alguna.



Séptimo.- Mediante escrito de fecha 27 de mayo de 2008, se procede al cambio del instructor del expediente, notificándose al interesado.

Octavo.- Con fecha 17 de junio de 2008, el instructor formula la propuesta de resolución en el sentido de que procede estimar la reclamación formulada, indemnizando al interesado con la cantidad de 730,80 euros.

Noveno.- El 15 de julio de 2008 la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxx informa favorablemente la propuesta de resolución indicada.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado g), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

Igualmente debe reprocharse la evidente tardanza en la tramitación del expediente, teniendo en cuenta que la interposición de la reclamación es de fecha 8 julio de 2005 y la propuesta de resolución de 17 de junio de 2008. Este retraso necesariamente ha de considerarse una vulneración por la



Administración de principios y criterios relativos a su actuación recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como los de eficacia, celeridad, eficiencia y servicio a los ciudadanos, entre otros, sin olvidar el incremento que ha de conllevar necesariamente la cantidad que como indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración se vaya a conceder al reclamante, en su caso, mediante la oportuna resolución.

A este respecto, debe tenerse presente que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anomalía en la tramitación de procedimientos; y que los términos y plazos establecidos en esta u otras Leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. Ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 41.1 y 47 de la Ley 30/1992, ya citada.

3ª.- Concurren en el interesado los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 142.2 de la Ley 30/1992 y 19 del Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, de atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus Órganos Directivos Centrales y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la que



además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 1 de marzo, 21 de abril y 29 de octubre de 1998; 28 de enero de 1999; 1 y 25 de octubre de 1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (Dictámenes de 27 de marzo de 2003, expte. nº 183/2003; 6 de febrero de 2003, expte. nº 3.583/2002; y 9 de enero de 2003, expte. nº 3.251/2002) y de este Consejo Consultivo (por todos, Dictámenes 1.008/2005, de 1 de diciembre; 1.134/2005, de 12 de enero de 2006; 59/2006, de 19 de enero; y 300/2006, de 23 de marzo), la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

5ª.- El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por D. xxxxx, debido a los daños ocasionados por el jabalí y el ciervo en unos terrenos de su propiedad.



La parte interesada ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Los hechos se produjeron durante la primavera y verano del año 2005 y la reclamación se presentó el 8 de julio de 2005, esto es, antes de transcurrir el plazo de un año desde la fecha del hecho causante.

6ª.- En cuanto al fondo de la cuestión planteada estima este Consejo Consultivo, de igual modo que los órganos que han informado previamente, que existe responsabilidad por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por los daños causados.

Tanto el ciervo como el jabalí tienen la consideración de especie cinegética de caza mayor, tal y como se deduce del anexo del Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las especies cinegéticas de Castilla y León. Además, se considera pieza de caza, según el artículo 9 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, y las órdenes anuales de caza de la Consejería de Medio Ambiente.

El artículo 12.1 de la referida Ley de Caza, en la redacción vigente en el momento de producirse los daños, disponía: "La responsabilidad de los daños producidos por la pieza de caza, excepto cuando el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá a:

»a) En los terrenos cinegéticos, a quien ostente la titularidad cinegética de dichos terrenos, independientemente de que las piezas de caza pertenezcan a una especie incluida o no en el correspondiente plan de aprovechamiento cinegético, salvo lo dispuesto en el artículo 57 de la presente Ley sobre palomares industriales.

»(...).

»b) En los terrenos vedados, a los propietarios de los mismos, cuando la condición de vedado se derive de un acto voluntario de éstos o a la Junta.

»c) En los refugios de fauna, a la Junta.



»d) En las zonas de Seguridad, a los titulares cinegéticos de los terrenos, a los propietarios de los vedados de carácter voluntario o a la Junta en el resto de terrenos vedados y en el de los refugios de fauna”.

En el caso sometido a dictamen, tal y como se deduce de los documentos incorporados al expediente administrativo, los daños se produjeron en unos terrenos enclavados en la Reserva Regional de Caza de xxxxx, creada por Ley 2/1973 de 17 de marzo, de la que es titular la Junta de Castilla y León.

Poniendo en relación el artículo 10 del Decreto 2.612/1974, vigente en el momento de producirse los hechos, que reglamenta el funcionamiento de las reservas regionales de caza, con el artículo 12 de la Ley de Caza de Castilla y León, antes referido, y con el artículo 4 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, que regula reglamentariamente el Título IV de la citada Ley, la responsabilidad de los daños producidos por las especies de caza, en este caso, es de la Junta de Castilla y León, puesto que ostenta la titularidad cinegética de los terrenos donde han tenido lugar los hechos.

Queda por lo tanto acreditada la relación de causalidad entre el daño producido y el funcionamiento de los servicios públicos, por lo que resulta conforme a derecho satisfacer la indemnización solicitada por el interesado.

7ª.- En cuanto a la valoración de los daños, este Consejo Consultivo muestra su conformidad con la cuantificación propuesta por los servicios administrativos, debiendo indemnizarse al reclamante con 730,80 euros, destacando que, al no haber realizado alegaciones en el trámite de audiencia el interesado, puede entenderse que, tácitamente, está conforme con la valoración del daño, de la cual ha tenido conocimiento.

Todo ello sin perjuicio de que el importe de la indemnización deba actualizarse a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, conforme a lo previsto en el artículo 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.



**CONSEJO
CONSULTIVO**
DE CASTILLA Y LEÓN

III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución estimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx, debido a los daños ocasionados por el jabalí y el ciervo en unos terrenos.

No obstante, V.E., resolverá lo que estime más acertado.